EL MERCURIO

Fecha: 29/06/2025 Audiencia: 320.543 Sección: EDUCACION
Vpe: $8.163.408 Tirada: 126.654 Frecuencia: SEMANAL
Vpe pág: $20.570.976 Difusión: 126.654
Vpe portada: $20.570.976 Ocupación: 39,68%

Informe "Redes que Transforman" fue coordinado por la UDD e incluye a más de 40 instituciones:

"No hay una institucionalidad robusta" y otras trabas para lograr una educación inclusiva

■ El diagnóstico muestra que aunque el tema ha ganado espacio en el debate público, su implementación efectiva sigue enfrentando obstáculos: suele depender de voluntades individuales y los docentes aún están poco preparados, advierten los especialistas.

M. CORDANO

Coordinadas por la U. del Desarrollo, más de 40 instituciones públicas, privadas y académicas se reunieron el año pasado a discutir sobre los avances de la inclusión educativa en Chile.

"Buscamos construir un diagnóstico común que nos permitiera tener resultados y así después poder plantear propuestas en esta línea", comenta María José Domínguez, directora de la Red de Inclusión Educativa, de la Facultad de Educación UDD.

Divididos en ocho mesas de trabajo que se reunían una vez por mes, los convocados —entre ellos representantes de municipios, de organizaciones relacionadas con el síndrome de Down o de fundaciones centradas en niños con altas capacidades (aquellos que exhiben un potencial excepcional en áreas como el intelecto, la creatividad, el liderazgo o el rendimiento académico)— llegaron a la conclusión de que aunque el tema ha ganado espacio en el debate público y las reformas de los últimos años, su implementación efectiva sigue enfrentando obstáculos.

En específico, las distintas organizaciones identifican ocho nudos críticos, los que detallan en el informe "Redes que Transforman: Diagnóstico de la Inclusión Educativa en Chile", dado a conocer hace pocos días.

Estas trabas son una débil institucionalidad inclusiva y un sistema fragmentado, normativas poco aplicables en contexto, liderazgos con escasa apropiación del enfoque inclusivo, falta de articulación entre sectores, carencia de personas y condiciones materiales adecuadas, brechas en la formación docente, invisibilización de grupos excluidos, así como una ausencia de la sistematización y escalamiento de buenas prácticas.

El documento advierte sobre la ausencia de políticas para el tránsito hacia la vida adulta de jóvenes con discapacidad o necesidades educativas específicas. En la foto, un estudiante con trastorno del espectro autista.

AFP

Largo aliento

"No hay una institucionalidad robusta en la materia, que mire el tema de la inclusión con la altura que se necesita", lamenta Domínguez. "Hoy en día, el tema de inclusión, sin el apellido de educativo, lo ve el Senadis, que es un servicio que depende del Ministerio de Desarrollo Social, con poco presupuesto".

Domínguez explica que desde allí, el foco ha estado puesto en temas de discapacidad física, dejando de lado necesidades educativas especiales que no se relacionan con el área motora.

Si bien en estos temas se involucra el Ministerio de Educación —continúa la académica—, "uno dice '¿y el Ministerio de Salud? ¿Y del Trabajo?' (...) Se necesita una institucionalidad robusta que pueda mirar la inclusión desde todas las aristas, porque al final la inclusión aborda todas: hay un tema de educación en la medida que el niño está en el colegio, pero qué pasa después de que sale, cuando tiene que entrar a trabajar. O qué pasa con sus cuidadores. Existe todo un tema de salud mental".

Transitar hacia un sistema más inclusivo es "un camino de largo aliento, que supera la duración de nuestros períodos de gobierno, y que nos llevará, sin duda, a ser una mejor sociedad, con más y mejores oportunidades para todos. Lograrlo necesariamente requiere de una institucionalidad pública capaz de darles estabilidad a los esfuerzos y coherencia a las transformaciones, tanto dentro de la política global de educación como en la relación de esta con otros sectores como salud, trabajo y otras políticas sociales", concuerda Isabel Zúñiga, presidenta ejecutiva de Fundación Mis Talentos, organización que también participó en la elaboración del informe.

"No es un desafío simple, y por lo tanto necesitamos contar con una institucionalidad robusta que lo sostenga", agrega Zúñiga.

En base a las conclusiones del documento, Domínguez señala que ya se trabaja en un plan de acción: un primer paso es dar a conocer un repositorio de buenas prácticas en inclusión educativa, al que cualquier interesado pueda acceder. Junto a eso, se trabaja en hacer una "priorización de políticas públicas en la materia, que vamos a consolidar para proponer a los candidatos (presidenciales)" y que "no necesariamente tengan que pasar por procesos legislativos muy profundos", dice.

El eje final es investigar las mallas curriculares de las carreras de Pedagogía en el país, para así conocer en profundidad cómo se aborda el tema (ver recuadro).

Aulas diversas

El diagnóstico que se elaboró también destaca la falta de formación docente continua y situada, en especial en temas que se relacionan con el diseño de estrategias inclusivas, el bienestar socioemocional y el trabajo con comunidades diversas.

"No se les está enseñando para estas aulas diversas", señala María José Domínguez, quien destaca que los futuros profesores deben aprender más sobre manejos socioemocionales o cómo hacer pruebas diferenciadas en base a un mismo currículum.

"Estamos a medio camino en la transformación de nuestro sistema de educación en uno inclusivo. Es un camino que cobró fuerza con el inicio del actual Programa de Integración Escolar (PIE) el año 2010, y por lo tanto, solo desde entonces y afortunadamente de manera creciente, necesitamos de docentes con conocimientos y competencias para tender la diversidad de necesidades de nuestros estudiantes. Naturalmente, antes del inicio de esta transformación, las escuelas que formaban a docentes no consideraban en sus mallas contenidos sobre educación inclusiva", complementa Isabel Zúñiga. Y agrega que "hoy es necesario impulsar grandes esfuerzos de formación continua que cubran esta necesidad en una porción significativa de docentes en ejercicio".

En ese sentido, Domínguez recuerda que "los colegios públicos en general tienen un avance en temas de inclusión más alto que los colegios privados, que no tienen ninguna obligación de recibir niños". Esto porque el programa PIE no aplica para colegios particulares pagados de forma obligatoria.